

República Dominicana y Haití

Entre el peligro supuesto y el beneficio tangible

Haroldo Dilla Alfonso

A lo largo de décadas de coexistencia en una misma isla, Haití y República Dominicana han construido una fuerte relación de interdependencia, que en la actualidad opera como una subordinación creciente y fragmentada del espacio haitiano a la economía capitalista dominicana, y un potencial surgimiento de regiones económicas binacionales en función de la acumulación global. La construcción ideológica racista antihaitiana en República Dominicana es también un ingrediente activo de esa relación. Para los sectores políticos e intelectuales democráticos de ambos países esto plantea un reto que solo podrán superar a partir de la crítica de las relaciones objetivas entre sus sociedades.

Invito al lector a leer cuidadosamente el siguiente párrafo:

La desnacionalización de Santo Domingo, persistentemente realizada desde hace más de un siglo por el comercio con lo peor de la población haitiana, ha hecho progresos preocupantes. Nuestro origen racial y tradición de pueblo hispánico no nos deben impedir reconocer que la nacionalidad se halla en peligro de desintegrarse ... La influencia de Haití ha corrompido la fibra sagrada de la nacionalidad ... La vecindad de Haití ha sido y sigue siendo el principal problema de la República Dominicana.

Haroldo Dilla Alfonso: sociólogo e historiador cubano; ex-director del departamento de estudios latinoamericanos del Centro de Estudios sobre América, La Habana; coordinador general de investigaciones y director del área de estudios fronterizos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), República Dominicana.

Palabras clave: relaciones binacionales, interdependencia, subordinación, nacionalismo, Haití, República Dominicana.

Según el mismo texto, el problema reside esencialmente en la cuestión biológica, dada la mayor fecundidad de los negros, su mayor resistencia a las enfermedades, su bajo nivel de desarrollo, sus pobres condiciones sanitarias, y la amenaza que todo ello supone para la «fisonomía étnica» de los dominicanos, supuestamente hispánicos. Si el lector supone que ese texto fue escrito por un jefecillo de alguna secta xenófoba fundamentalista, se equivoca. Perteneció a Joaquín Balaguer, antiguo cortesano de la época de Rafael Leonidas Trujillo, repetidas veces presidente de República Dominicana, reconocido en el país como un intelectual valioso y sepultado en fecha reciente con los honores debidos a un prócer.

Ello no resulta nada extraño en el contexto nacional. Argumentos como ese fueron usuales en República Dominicana en todo el siglo xx, y de hecho sirvieron de base para justificar la masacre de haitianos durante el gobierno de Trujillo en 1937. Aún hoy campean en la prensa dominicana opiniones de voceros de un llamado «nacionalismo» que definen la «dominicanidad» como algo incompatible con Haití, aunque al hacerlo castren la riqueza cultural del pueblo dominicano y nos transmitan una caricatura «blanca», «hispánica» y «católica» de una de las sociedades más mestizas del hemisferio desde cualquier ángulo que se le mire.

Lo más significativo de esta cita es que fue precisamente su autor quien, en uno de sus controvertidos mandatos presidenciales, ordenó la apertura de la frontera al intercambio comercial, creando así la premisa legal para el desarrollo de un comercio muy activo entre ambos países, y además favoreció invariablemente la entrada masiva de braceros haitianos al país durante los largos años en que estuvo en el poder. Una réplica menos dramática de la actitud de su mentor, Trujillo, cuando en 1937 ordenó la matanza de miles de haitianos asentados en la zona fronteriza, y simultáneamente impidió, *manu militari*, el retorno a Haití de los aterrorizados braceros contratados por los ingenios azucareros. Y es que ambos hombres, más talentosos que los patéticos intelectuales a cargo de la prédica «nacionalista», entendieron que la relación con Haití era densa y compleja, y que nada podía ser mejor para el capitalismo dominicano que envolverla en una interpretación esquizofrénica, que aprovechara sus beneficios tangibles y consagrara ideológicamente sus peligros, reales y supuestos.

Haití –sea como consumidor de bienes, como proveedor de fuerza de trabajo o como destinatario de inversiones– es un apoyo clave para la acumulación capitalista en República Dominicana. Su misma existencia, pobre y diferente,

es otro soporte vital para la política dominicana. La agitación que provoca la supuesta «invasión pacífica haitiana» es útil en muchos sentidos. Por un lado, genera un clima más adecuado para la explotación de los haitianos; por otro, es un excelente camuflaje para distintos problemas del país.

Hace algo más de un año, un alto oficial de las Fuerzas Armadas declaró enfáticamente que Haití seguía siendo «el principal problema de la seguridad nacional dominicana». En esos mismos días se descubrió un fraude colosal (de 2.000 millones de dólares) del principal banco del país. El banquero responsable recibió la visita solidaria de muchos altos políticos y funcionarios en su confortable celda, y hoy disfruta de reclusión domiciliaria en una de sus numerosas mansiones. El desfalco, según algunos economistas, lanzó a la pobreza a un 15% de la población dominicana. El general antes referido debe tener problemas para convencer a los cientos de miles de dominicanos empobrecidos de la veracidad de su sesgada definición de «seguridad nacional».

La construcción histórica

Cuando en el siglo XVII los primeros colonos franceses se asentaron en la parte occidental de la isla llamada Española, no hicieron otra cosa que tomar ventaja de la situación depauperada de la otrora floreciente colonia de Santo Domingo, cuyos habitantes habían sido reconcentrados por Madrid en la parte oriental, para evitar sus involucramientos en el comercio de contrabando, y el contagio con las ideas «luteranas».

A partir de ese momento, comenzó una relación marcada por la asimetría de poderes y el intercambio desigual. Durante todo el siglo XVIII la frontera experimentó un constante corrimiento hacia el Este, sobre una región legalmente española, pero en realidad despoblada y sin ejercicio efectivo de jurisdicción. España reconoció *de jure* la presencia francesa mediante los acuerdos de Ryswick (1697) y Aranjuez (1777). En el plano económico, la colonia española, y en particular sus regiones más cercanas al movedizo borde, fueron incorporadas a la briosa economía de plantaciones de Saint Domingue, como proveedoras de alimentos y materias primas.

Los sucesos europeos y la revolución haitiana cambiaron sustancialmente la situación de la isla compartida. El control español sobre la parte oriental dejó de existir, y la «primada de América» quedó en un limbo de soberanía. En 1795 España cedió la colonia a Francia mediante el tratado de Basilea. A principios del siglo XIX los revolucionarios haitianos, temerosos del establecimien-

to de una base contrarrevolucionaria en la parte oriental y aprovechando su vacío político, la invadieron varias veces y la anexaron en 1822, situación que duró hasta 1844, cuando los dominicanos proclamaron su independencia.

La coexistencia de dos naciones independientes en la isla no afectó el tipo de relación previamente establecida. Haití era entonces, y lo fue hasta bien entrado el siglo XX, la parte más fuerte de la ecuación. En términos demográficos, casi duplicaba la población dominicana. Su economía era más dinámica y su ejército mejor organizado y entrenado. Por estas razones, República Dominicana continuó tributando plusvalor a la parte haitiana, mientras que ésta siguió ensanchándose a expensas de las despobladas regiones fronterizas dominicanas. Los intentos de establecer tratados limítrofes fracasaron, en buena medida por el entendible desinterés de la parte haitiana.

Esta relación comenzó a cambiar cuando se invirtió la correlación de fuerzas. Desde 1916 y hasta 1924 Estados Unidos ocupó República Dominicana, generando las instituciones básicas para un Estado centralizado, y en particular un ejército disciplinado y entrenado, al mando de Trujillo. Al mismo tiempo, se implementaron las acciones jurídico-políticas y sociales necesarias para un proceso inversionista en el sector agroexportador, y principalmente en el azúcar (adecuación jurídica, expropiación de tierras, represión del movimiento campesino, etc.), que completó la inserción dominicana en la economía capitalista mundial. Una condición para ello eran la delimitación y demarcación limítrofes. Trujillo, en el poder desde 1930, culminó ese proceso mediante un acuerdo haitiano-dominicano de delimitación fronteriza y buena vecindad firmado en 1936, dándole un toque muy personal cuando, un año más tarde, ordenó una campaña de limpieza étnica que costó la vida a cerca de 20.000 haitianos o de sus descendientes que vivían en la franja fronteriza o que cruzaban diariamente la frontera para trabajar.

A partir de entonces, y hasta muy avanzada la década de los 80, la relación con Haití se centró fundamentalmente en garantizar el tráfico de braceros, vitales para la zafra azucarera y posteriormente también para otras actividades económicas, rentable negocio en el que han participado, en estrecha connivencia, funcionarios civiles y militares de ambos países. La frontera fue sometida a un fuerte control, y cesaron los intercambios espontáneos entre las colectividades a ambos lados del borde. Las comunidades fronterizas dominicanas sufrieron un proceso de colonización y militarización que incluyó el asentamiento de nuevos inmigrantes para «blanquear» la región y reafirmar el carácter hispánico y católico de la «nueva patria». Curiosamente, para es-

tos fines fueron importadas varias familias japonesas, algunos de cuyos descendientes mestizados aún habitan en las empobrecidas ciudades limítrofes.

La caída de la dinastía Duvalier en Haití, la inestabilidad política subsiguiente, el bloqueo decretado por EEUU y la posterior disolución de las FFAA haitianas implicaron inevitablemente el relajamiento de los controles fronterizos y el surgimiento de República Dominicana como un importante suministrador de bienes a Haití. Ante los ojos de la clase empresarial dominicana, ineficiente y con una predilección fatal por las ganancias fáciles, Haití –empobrecido y carente de instituciones públicas reguladoras– apareció como una atractiva oportunidad de comercio e inversión.

Radiografía del intercambio desigual

Las relaciones económicas entre Haití y República Dominicana muestran una transferencia neta de valores desde la primera a la segunda, lo que se expresa claramente tanto en el comercio de bienes como en las nuevas modalidades que ha asumido la migración de trabajadores haitianos. El comercio de bienes entre ambos países se distingue por dos características que reportan beneficios netos para República Dominicana. Ante todo, es un comercio que ha tenido un crecimiento notable en los últimos años dado el incremento unilateral de las exportaciones dominicanas a Haití, lo que reporta un balance comercial excepcionalmente positivo. El siguiente cuadro muestra una evolución de este comercio conforme a los registros de los organismos reguladores dominicanos, omitiendo exportaciones de zonas francas¹ y otros segmentos del comercio fronterizo, sean estos ilegales (drogas, armas y contrabando) o simplemente informales, principalmente productos alimenticios.

Como resultado de este incremento de las exportaciones, Haití se ha consolidado como el tercer mercado para los productos dominicanos, solo aventajado por EEUU y Puerto Rico, absorbiendo un 10%-15% de las exportaciones dominicanas. Sin embargo, lo más relevante para nuestros propósitos radica en la estructura de esas exportaciones, considerando que República Dominicana exporta a Haití productos que no son competitivos en ningún otro mer-

1. Las zonas francas ubicadas en territorio dominicano exportan 15 millones de dólares a Haití, un 20% de los cuales corresponde a ropas usadas, curiosamente el principal bien de exportación de Haití a República Dominicana. Es presumible que una parte significativa de esas ventas de ropas regresa al país. Dado que las zonas francas dedicadas a ese renglón están ubicadas en la frontera, pudiera adelantarse la hipótesis de que en realidad esta mercancía nunca entra a territorio haitiano y que las ventas son solamente operaciones contables. Esta sería otra modalidad fraudulenta de uso de Haití en la acumulación capitalista dominicana.

Balance del comercio dominicano con Haití
(millones de dólares)

Año	Exportaciones	Importaciones
1996	24.4	0.08
1997	26.5	0.3
1998	47.4	0.4
1999	67.2	0.06
2000	58.4	0.2
2001	72.1	0.3
2002	88.7	Nd
2003	111.8	Nd

cado internacional, e incluso algunos que ni siquiera se consumirían en el mercado nacional.

Si exceptuamos las exportaciones de productos agropecuarios –una parte significativa de las cuales transcurre por la vía informal, a lo cual nos referiremos más adelante– las exportaciones dominicanas a Haití son mayoritariamente de productos industriales. Este es un sector poco competitivo, que durante décadas sobrevivió bajo la protección estatal y hoy sufre los rigores de la desregulación. Estos productos constituyen solamente el 27% de las exportaciones totales nacionales, pero proveen el 54% del valor de las mercancías exportadas al país vecino. Entre otros aquí se incluyen 4.4 millones de dólares de cemento (el 100% de la exportación de este producto), 3.9 millones de varillas de acero (20%), 2.4 millones de pilas secas (100%) y cerca de 1 millón de fertilizantes (100%). Curiosamente, el país exporta a su vecino 3.8 millones de dólares de un vino tinto nacional que, como el lector podrá imaginarse, no figura entre los muchos dones dominicanos. Por último, en el marco de este comercio República Dominicana está en la posición probablemente excepcional de vender a Haití cerca de medio millón de dólares de hielo. Desde esta perspectiva, la existencia del mercado haitiano constituye una tabla de salvación para un sector significativo de la planta industrial dominicana.

Por otra parte, muchos de los productos vendidos a Haití son en realidad desechos que no podrían colocarse en ningún otro lugar. Aquí se incluyen ventas millonarias en dólares de productos como el arroz picado (2.2 millones), residuos de galletas (0.2 millones) y desechos de papel (1 millón). Los productos agropecuarios que absorbe este mercado son regularmente aquellos que por su tamaño, aspecto o estado de conservación no podrían venderse en el mercado local, entre los cuales destacan huevos (unos 10 millones de dólares), plátanos, maíz, cocos, etc. En este sentido se trata de un submercado

que digiere producciones no realizables en ningún otro contexto y que, por lo tanto, genera cuotas extraordinarias de ganancias.

Haití compensa este grave desbalance comercial exportando a República Dominicana productos que por diversas razones no se registran en las estadísticas formales. En un primer plano, vende en los mercados locales fronterizos ropas usadas y productos reexportados (aceite, arroz, perfumes, etc.), que aprovechan la ventaja de la casi total inexistencia de aranceles en el país, así como también algunos productos agropecuarios y animales de tiro y carga. Finalmente, exporta a República Dominicana su mercancía más abundante: fuerza de trabajo barata y desprotegida.

La realidad de la «invasión pacífica»

A pesar de que sectores importantes de la clase política dominicana y los retóricos intelectuales «nacionalistas» han clamado, con insistencia propia de autistas, contra una supuesta «invasión pacífica» haitiana, se han negado con el mismo fervor a contar los «invasores». En épocas de agitación racista –por ejemplo cuando en 1996 varios partidos se coaligaron para impedir el triunfo electoral del candidato negro José Francisco Peña Gómez– el número puede ascender a dos millones, pero cuando el Estado se toma en serio las deportaciones y la fuerza de trabajo escasea, los empresarios siempre se encargan de aclarar que no pasan de un cuarto de millón. Un cálculo realizado a principios de los años 90 (Báez) sugería no más de medio millón de inmigrantes, por lo que en la actualidad pudiera hablarse de una cifra oscilante entre medio millón y un millón de haitianos y sus descendientes radicados en el país.

De cualquier manera el número encerraría diferentes patrones de migraciones. En las zonas fronterizas la migración toma formas diversas: movimiento pendular de corto plazo, asentamientos en barrios marginales de las ciudades limítrofes y asentamientos de campesinos en parcelas arrendadas por dominicanos. En el resto del país la migración está dirigida a suplir fuerza de trabajo en actividades económicas vitales, y puede tener un carácter absolutamente temporal o con mayores aspiraciones de permanencia. En todos los casos, sin embargo, se trata de una migración desprotegida tanto en términos de la legislación dominicana como del gobierno haitiano, el cual ha mostrado un desinterés olímpico en sus ciudadanos emigrantes, excepto cuando se ha tratado de montar *shows* publicitarios, muy comunes durante los mandatos del recientemente derrocado presidente Jean-Bertrand Aristide. En territorio dominicano los haitianos raras veces tienen la posibilidad de obtener la resi-

dencia legal, y a pesar de que la Constitución reconoce el derecho de suelo para la obtención de la ciudadanía, esto está vedado a los descendientes de haitianos nacidos en el país. De ahí que las cifras sobre el número de haitianos radicados en República Dominicana estén siempre viciadas por la existencia de miles de dominico-haitianos que nunca han visitado el país de sus padres y que portan rasgos fundamentales de la cultura receptora.

Una encuesta realizada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) revela que los migrantes haitianos no son la parte más pobre ni menos calificada de la sociedad haitiana. La mayoría de ellos tenía empleos fijos en Haití, terminó estudios de primaria y se ubica entre los 17 y los 40 años, grupo etario laboral óptimo. El 59% llevaba residiendo un mes o menos en República Dominicana, a partir de su última entrada, y solo el 5% tenía más de cinco años, lo que habla de un activo proceso de retorno que difícilmente ayudaría a explicar la supuesta «invasión pacífica». En un 80% de los casos estas personas regresaban periódicamente a Haití a reunirse con sus familias. A diferencia de sus predecesores, trabajadores cañeros hacinados en los bateyes, estos migrantes habitan principalmente en zonas urbanas y han logrado penetrar otros sectores económicos. Aunque el 15% continuaba laborando en el sector azucarero, un 18% se empleaba en otras actividades agrícolas y un 39% en la construcción, pero al igual que antes, son sometidos a una fuerte explotación, con un 44% que trabaja más de ocho horas y un 43% que recibe ingresos menores que los dominicanos por igual trabajo.

Los migrantes haitianos apuntalan la rentabilidad de sectores específicos de la economía y los servicios de República Dominicana tales como el sector del arroz (sostén económico de vastas regiones y al mismo tiempo un rubro que no sobreviviría sin la activa protección estatal), el de la declinante producción azucarera y el de las construcciones. Pero sobre todo actúan en el mercado laboral dominicano como agentes depresores, con la consiguiente elevación general de las tasas de ganancias. En las nuevas condiciones de la reproducción capitalista dominicana, los migrantes haitianos se consolidan como los más explotados y oprimidos de las clases trabajadoras, tan inherentes a esta reproducción como los trabajadores nativos, y seguramente más que los cientos de miles de dominicanos que deambulan entre el desempleo y las pocas oportunidades del sector informal. En tal contexto, la relación social establecida tiende a anteponer aquellas formas de poder que Max Weber explicara como basadas en el «grupo de estatus» y en la clase, mediante lo que Rubén Silié ha identificado como un proceso de «etnización» de la situación clasista.

La frontera en una nueva dimensión

La frontera dominicana ha sido históricamente una región poco poblada y extremadamente subdesarrollada. En la actualidad su principal actividad económica es el creciente comercio con Haití, sea éste formal, informal, legal o ilegal, categorías todas que se disuelven en una serie de prácticas sociales de sobrevivencia. En particular, las principales ciudades limítrofes albergan ferias binacionales a las que concurren miles de vendedores y compradores de Haití y de otras provincias dominicanas. Los haitianos van a vender productos importados o donados, y en menor escala algunas producciones agrícolas, y también a adquirir alimentos y otros productos de primera necesidad. Frecuentemente es la única oportunidad que tienen para lograr algún ingreso y, sencillamente, comer. Para los dominicanos, en cambio, la feria es regularmente una vía que permite obtener ingresos adicionales y abaratar la canasta básica comprando ropa usada, arroz, aceite y otros productos reexportados desde Haití, más baratos y de mejor calidad que los dominicanos.

En un estudio realizado en Dajabón –ciudad fronteriza que alberga la mayor feria comercial– la totalidad de los concurrentes haitianos reportó ingresos inferiores a 120 dólares mensuales, contra solo el 18% de los dominicanos en la misma situación (Dilla Alfonso/De Jesús). Ambas partes son pobres e interdependientes, pero la pobreza tiene sus gradaciones, y la interdependencia sus matices. Para los dominicanos, el intercambio con Haití es la principal opción y es una buena opción. Para los haitianos es la única. El intercambio desigual también impregna las relaciones transfronterizas más cotidianas.

Lo distintivo de la situación actual en esta zona es la formación de regiones binacionales transfronterizas que suponen la paulatina subordinación fragmentada del espacio haitiano a los procesos internacionales de acumulación, y donde los capitales dominicanos actúan como los intermediarios activos. Es una tendencia visible en la evolución del propio comercio, cuyas franjas más rentables han sido controladas por grandes y medianos empresarios dominicanos y haitianos asociados, pero sobre todo parece madurar en la instalación de zonas francas industriales en la frontera haitiana, en una hábil jugada que permitiría al capital aprovechar las ventajas comparativas de ambos lados.

La primera de esas zonas francas –instalada por una compañía dominicana– ya está operando en la ciudad limítrofe haitiana de Ounaminthe, empleando a unos 1.000 obreros haitianos y personal técnico y de seguridad dominicano. Su principal función es concluir el «ensamblaje» de piezas textiles provenien-

tes de las zonas francas de Santiago de los Caballeros, la segunda ciudad dominicana. Su ubicación en Haití responde a tres condiciones. La primera es el vacío legal e institucional en ese país, lo que permite evadir incluso las mínimas exigencias que impone el Estado dominicano. La segunda es la abundante y devaluada mano de obra haitiana. La tercera, el acceso al mercado textil norteamericano, dada la disponibilidad de la cuota haitiana.

Aunque no puede negarse el efecto positivo que implica generar un millar de empleos, aun en condiciones de superexplotación, en un lugar donde no hay otras opciones, la zona franca ha pasado a ser eje de varios conflictos con grupos organizados haitianos, sea por razones medioambientales, salariales o simplemente nacionalistas. Un efecto predecible es la aglomeración de mayor población en Ounaminthe, originando una triple presión: sobre el devastado medio ambiente, los deteriorados servicios de la ciudad y la propia frontera.

Modernizando la primera instancia

La situación antes descrita no responde en última instancia a una cuestión legal, sino a la dinámica de la reproducción capitalista en ambos países y a las formas específicas en que cada uno de ellos se inserta en la economía capitalista global, e implica soluciones de largo plazo que deberán ser construidas por ambas sociedades desde una perspectiva diferente –y presumiblemente opuesta– a la que genera esa dinámica. No es posible pensar en una hermandad binacional mientras la relación objetiva que nutre esa binacionalidad se basa en la subordinación de una parte a la otra, pero si, como advertía Keynes, todos estaremos muertos en el largo plazo, conviene detenernos en las alternativas que existen en la actualidad y que contribuirían a crear un escenario más adecuado para ese largo plazo al que aspiramos.

Todo ese estado de cosas convive con legislaciones atrasadas o con vacíos normativos impresionantes. La normatividad fronteriza en vigor, por ejemplo, es esencialmente la misma que se instituyó en la época de Trujillo, cuando la frontera permanecía cerrada y era percibida como un valladar a la expansión haitiana. Hoy hablamos de un área dinámica de tránsito de mercancías, personas y capitales. Cuando se han producido innovaciones públicas, sus efectos han sido limitados por los solapamientos legales e institucionales. Se trata de un mercado aquejado de un clima de impredecibilidad que afecta a los propios actores económicos privados. La situación migratoria no es diferente. Desde mediados de los años 90 existen proyectos de leyes que intentan normar la migración; todos han sucumbido a las presiones políticas de sectores retrógrados.

Evidentemente una primera instancia de solución sería la promulgación de un cuerpo jurídico-institucional moderno que reconozca los derechos y deberes de los inmigrantes, que reglamente las modalidades migratorias, y que resuelva la situación de los miles de dominico-haitianos que sobreviven en un limbo legal. En este mismo sentido, es imprescindible un *aggiornamento* del régimen fronterizo. Hay que reconocer, sin embargo, que si la clase política dominicana decidiera avanzar en esa dirección, siempre enfrentaría un problema mayor en la debilidad e inestabilidad institucional haitiana. De hecho, entre 1990 y el presente se han realizado numerosos contactos y convenios entre ambos gobiernos, de los cuales solo quedan la experiencia y los protocolos. No es un problema adjetivo: cualquier avance en la dirección apuntada requiere acuerdos binacionales, negociaciones y monitoreos mutuos².

Por otra parte corresponde a las organizaciones de la sociedad civil dominicana, y a sus intelectuales y políticos democráticos, asumir una posición más comprometida con este estado de cosas. Existen algunas organizaciones que han desarrollado una importante labor de denuncia y monitoreo de la situación de los haitianos en el país y han impulsado la aprobación de una legislación más favorable, pero la cuestión haitiana, incluyendo aquí la situación fronteriza, continúa siendo un tema restringido y siempre sospechoso de complicidad antinacional. A contrapelo, existen experiencias de solidaridad que se sobrepone a los frenesíes nacionalistas de ambas partes. Recientemente, una ciudad dominicana fronteriza, Jimaní, fue arrasada por un río desbordado. Las primeras personas que acudieron en ayuda de los damnificados fueron los residentes en Fond Parisien, una localidad haitiana contigua. Son aún datos aislados, pero que hablan de la construcción de una nueva cultura de tolerancia y civilidad binacional a la que estos pueblos no pueden renunciar en su búsqueda de un mundo mejor.

2. La crisis institucional haitiana y el desinterés crónico de su clase política en cuanto a concertar y trabajar en una dimensión binacional ha sido también un obstáculo para la concreción de varios proyectos de desarrollo implementados por las agencias internacionales en la zona fronteriza.

Referencias

- Báez, Frank: *Migraciones internacionales en República Dominicana*, Onaplan, Santo Domingo, 1994.
Balaguer, Joaquín: *La isla al revés*, Ed. Corripio, Santo Domingo, 1994.
Dilla Alfonso, Haroldo y S. De Jesús: *Intermediación urbana fronteriza: el caso de Dajabón*, Flasco, Santo Domingo, 2004.
Flasco / OIM: *Encuesta sobre inmigrantes haitianos en República Dominicana*, Santo Domingo, 2004.
Silié, Rubén: «República Dominicana atrapada en sus percepciones sobre Haití» en Wilfredo Lozano (ed.): *La cuestión haitiana en Santo Domingo*, Flasco, Santo Domingo, 1992.